

## AGENDA CIUDADANA

### NO VEO, NO OIGO Y NO HAGO NADA

Lorenzo Meyer

**El Problema.**- “Fuera de la macroeconomía, no hay salvación”, esa es la divisa del gobierno actual. Para su desgracia y la del resto de los mexicanos, el mundo de la responsabilidad política de un gobierno es mucho más vasto que el de la mera economía. Sin embargo, frente a la multiplicidad y complejidad de los problemas políticos -deterioro de la seguridad pública, resistencias del viejo régimen a la transición a la democracia, violación creciente de los derechos humanos, ensanchamiento de los espacios que dividen a las clases sociales, narcotráfico, corrupción oficial, ineficacia creciente de las instituciones públicas, una política exterior sin proyecto, persistencia de la resistencia armada (EZLN y EPR), etcétera- la respuesta del presidente y su círculo se puede resumir en esta sencilla fórmula: no veo, no oigo y, por tanto, no hago nada. En cierto sentido, es llevar hasta sus últimas consecuencias la fórmula que Carlos Salinas aplicó a la oposición de izquierda durante su gobierno.

Es verdad que en arenas secundarias o donde la fuerza del gobierno es apabullante, el “olvido benigno” -”*benign neglect*”- puede no ser muy ético pero sí eficaz. Sin embargo, en zonas que afectan, y mucho, a la mayoría de la población o a grupos con capacidad de respuesta, el simple desentenderse de los problemas puede agravarlos y, en algunos casos, desembocar en la ingobernabilidad. Esto último es justamente lo que está ocurriendo en varias áreas de la vida mexicana.

**Un Ejemplo: el Caso de Amnistía Internacional.**- Por primera vez en los 36 años que tiene de vida Amnistía Internacional (A.I.) --ganadora en 1977 del Premio

Nobel de la Paz--, la organización decidió enviar a México a su más alta autoridad, al secretario general Pierre Sanè, acompañado de más de una docena de miembros de su Comité Ejecutivo. La visita se decidió y empezó a planearse hace dos años y así se le hizo saber, desde luego, al gobierno mexicano.

La razón del viaje de los directivos de A.I. a México era una manera de subrayar que en nuestro país se habían incrementado, hasta llegar a un nivel preocupante, el ataque a los derechos humanos. Aquí conviene recordar que, por definición, sólo los gobiernos pueden ser violadores de esos derechos. En vista de lo anterior, era natural que el secretario general de A.I. buscara entrevistarse con el presidente, por ser éste el responsable de ese aparato gubernamental --policías, ejército y el sistema de justicia-- que ha aumentado su tradicional falta de respeto por los derechos humanos. Sin embargo, en el último momento el Sr. Sané y su comitiva fueron informados de que el presidente Zedillo tenía ya una apretada agenda y no podría recibirlos.

El examen de la agenda presidencial del 24 de septiembre --el último día que el Sr. Sanè estuvo en México-- muestra que, en realidad, el presidente si pudo pero no quiso ver al secretario de A.I. para no recibir su desagradable mensaje. En efecto, en ese día, el mandatario mexicano decidió dejar la capital del país para ir a Nuevo León para, entre otras cosas, visitar el ejido "El Guajolote" y tomar la protesta de las mesas directivas de Cocina Popular y Unidad de Servicios Intensivos, inaugurar un museo regional en Linares patrocinado por los directivos de MVS, y cortar los listones de inauguración de una interconexión vial, de un túnel y de un sistema de tomas domiciliarias de agua. En importancia para México, realmente ninguno de esos compromisos u otros similares se pueden comparar con la de los asuntos que traía en su agenda el secretario de A.I. Sin menoscabo de la importancia de "El Guajolote", el

museo de Linares o el túnel de Loma Larga, resulta que éstos van a estar con nosotros por mucho tiempo más y bien podían haber esperado a la siguiente visita presidencial o haberse puesto en marcha sin ella en aras de algo muy sustantivo: los derechos humanos.

Para justificar su desaire a A.I., el gobierno mexicano informó que la organización había sido avisada a tiempo de la imposibilidad del presidente de entrevistarse con sus representantes por razones de agenda -ya vimos cuales- y le propuso, en cambio, ver a personajes secundarios. A.I. rechazó esa devaluación de sus contactos oficiales en México pues no se trataba de una visita protocolaria, y en cambio contraargumentó que la cita con el presidente había sido concertada a tiempo pero cancelada por éste en el último minuto (*Reforma*, 26 de septiembre). Dadas las divergentes historias que en materia de credibilidad tienen A.I. y el gobierno mexicano, no queda más que aceptar como buena la versión de la primera. El no ver ni oír a A.I., no impidió que la organización internacional divulgar algunas de sus cifras negras sobre México: de enero a septiembre de 1997 se tuvo conocimiento de que en el país había habido 40 ejecuciones extraoficiales, 30 desapariciones, 70 casos de tortura más 500 detenciones arbitrarias. En otra declaración, A.I. dijo tener documentados 150 casos graves de tortura y 120 presos de conciencia en México, (*Reforma*, 22 y 25 de septiembre).

La agenda presidencial en relación con la violación de los derechos humanos resulta un claro ejemplo del no oigo, no veo, no hago nada. En contraste, A.I. oye, ve y actúa. La organización no sólo va a seguir divulgando lo que sabe sobre el creciente deterioro de los derechos humanos en nuestro país, sino también la falta de voluntad del gobierno de Ernesto Zedillo para cumplir con sus obligaciones nacionales e

internacionales en este campo. La presión externa sobre el gobierno mexicano va a aumentar en un mundo que ya no acepta que, en nombre de la no intervención en asuntos internos, los gobiernos cometan crímenes e injusticias y los cubran con el manto de la soberanía. En este contexto, la denuncia del canciller mexicano en la ONU por la ejecución de dos mexicanos condenados a muerte por tribunales norteamericanos, carece de fuerza porque al gobierno denunciante le falta la autoridad moral para acusar a otro de arbitrariedades que palidecen frente a las que él mismo comete con sus propios ciudadanos.

**Ingobernabilidad.-** La ingobernabilidad no es una condición absoluta sino de grado. En cualquier país puede haber zonas donde sea alta la capacidad del gobierno para formular y ejecutar sus decisiones mientras en otras ocurre lo contrario. Lo grave es cuando la ingobernabilidad se presenta en áreas estratégicas, donde afecta la calidad de vida de la mayoría de la población, y eso es precisamente lo que está sucediendo en México. En nuestro país hay ya ingobernabilidad en materia de seguridad pública, con lo que, entre otras cosas, se incumple con una de las obligaciones básicas de todo gobierno con sus gobernados. En efecto, las cifras muestran que hay una incapacidad estructural de las autoridades para controlar a las policías y al aparato de impartición de justicia en su nivel básico. Por ejemplo, el 97% de los delitos denunciados en el Distrito Federal --que son sólo una parte del gran total-- no llegan a ser esclarecidos. La policía no sólo es ineficaz, sino que en buena parte de los casos es el elemento criminal mismo. El haber puesto al general Enrique Salgado Cordero al frente de la policía capitalina --y con él a varios centenares de militares con licencia--, no ha dado ningún resultado positivo. Según las cifras de Rafael Ruiz Harrel, con los militares a cargo de la lucha contra el crimen, éste ha

crecido como nunca: en 4.8% en lo que va del año, es decir, el doble de la media anual registrada entre 1930 y 1990 (*Reforma*, 29 de septiembre).

El secuestro y posterior asesinato en el sur de la Ciudad de México el 25 de septiembre del doctor Sergio Camposortega Cruz, un reconocido profesor e investigador en el área de la demografía, es un caso más, aunque particularmente cercano y sentido por el mundo académico, que muestra el grado de avance de la ingobernabilidad en la capital del país. Hay la sospecha que los secuestradores del académico fueron precisamente policías (véase el razonamiento expuesto por Miguel Ángel Granados Chapa al respecto, *Reforma*, 28 de septiembre). Igual sospecha existe en relación a un buen número de otros crímenes y de los 124 ataques a periodistas que han tenido lugar entre 1996 y 1997. En realidad, la élite política hace tiempo que perdió el control de sus subordinados en el área de la seguridad y justicia; estos últimos han encontrado que lo más redituable de su organización, armamento y entrenamiento, es ponerlos al servicio de sus intereses particulares actuando como parte del crimen organizado, al que deberían combatir pero del que son parte sustantiva.

**Narcotráfico.-** En este renglón es evidente, y desde hace mucho, la incapacidad del gobierno para hacerle frente al desafío que se le ha presentado. Sin que se nos den detalles, ya sabemos que el narcotraficante más importante, y supuestamente fallecido el 4 de julio, Amado Carrillo, pudo viajar a Cuba apoyado por funcionarios del gobierno. Los casos de José Zorrilla Pérez (Dirección Federal de Seguridad) durante el gobierno de Miguel de la Madrid y del general Jesús Gutiérrez Rebollo (Instituto Nacional para el Combate a las Drogas) en el actual, demuestran que las mafias del narcotráfico no han tenido ningún problema en penetrar las instituciones

oficiales encargadas de combatirlos. Pero si de la vulnerabilidad de la policía y el ejército a la acción del narcotráfico ya se sabía, la posibilidad de que la Iglesia se una a la lista de estas instituciones no ha dejado de causar alguna sorpresa. Según lo apuntó el sacerdote Raúl Soto en su homilía del 19 de septiembre en la Basílica de Guadalupe, “gente poco recomendable” pero solidaria, como Amado Carrillo (cartel de Juárez) y Rafael Caro Quintero (cartel de Guadalajara), ha hecho aportaciones muy significativas para las obras de la Iglesia.

Mientras los asaltos en las carreteras federales nos retrotraen al México del siglo XIX y a los bandidos de Río Frío -en lo que va del año, 213 asaltos a autobuses de pasajeros, 181 a camiones de carga y 85 a vehículos particulares (*El Universal*, 27 de septiembre)--, la Policía Federal de Caminos, se encuentra muy ocupada dando escolta a los trailers que traen cocaína entregada por guatemaltecos en Chiapas a cambio de autos robados en Estados Unidos y México, los cuales circulan hacia sus destinos en el extranjero cuidados por esos mismos policías, (*Reforma*, 29 de septiembre). Por su parte, la Procuraduría General de Justicia acaba de presentar ante un juez a los 14 pilotos, mecánicos y navegantes que el 1º de septiembre, y en aviones de esa dependencia, también transportaban cocaína de Chiapas a la capital de la República . En fin, sólo un puñado de páginas --anécdotas, casi-- del abultado libro negro del narcotráfico en México. En esas circunstancias ¿de donde va a sacar fuerza y autoridad el gobierno mexicano para rechazar la creciente presencia norteamericana en el combate al narcotráfico en nuestro territorio?.

**El Problema Chiapaneco.-** El conflicto que estalló en Chiapas en enero de 1994 --incubado por muchos años de injusticia e irresponsabilidad-- ilustra a la perfección la actual política de no ver y no oír y dejar que tiempo acabe con el

problema: que la ausencia de negociaciones, el cerco militar, la vida en la montaña, el aislamiento y la miseria, derrotan a los rebeldes zapatistas, como el invierno lo hizo con Napoleón en Rusia. Para acelerar el final de quienes se atrevieron a lanzar una declaración de guerra al mal gobierno, las autoridades han dejado, como nos narra desde Chiapas Herman Bellinhausen (La Jornada, 28 de septiembre), que el ejército y la policía organicen y armen grupos paramilitares y que los indígenas acaben con los indígenas, siguiendo una fórmula usada desde el siglo XVI. El resultado: expulsiones, casas quemadas, heridos y muertos.

El presidente Zedillo declaró a la prensa alemana que el dramático incremento en la inseguridad pública no es producto de los graves efectos del modelo económico sobre el nivel de vida de la población --conviene recordar que en el D.F. el 48% de la fuerza laboral tiene ingresos que fluctúan entre 26 y 52 pesos al día, según datos oficiales-- sino a “un problema moral, de relajamiento de valores” (Reforma, 29 de septiembre). Concediendo sin aceptar la opinión presidencial, resulta que donde ese relajamiento moral ha sido mayor, y ha servido de ejemplo al resto de la sociedad, es precisamente entre la clase gobernante.